

Cápsula informativa

UNIDAD DE DELITOS DE ODIOS Y DISCRIMINACIÓN

Número 3/2024

● 1 de febrero de 2024

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (Sección Quinta)

Demanda nº 24225/19 de 30 de noviembre de 2023

CASO GEORGIAN MUSLIM RELATIONS Y OTROS C. GEORGIA

Odio religioso. Necesidad de adopción de todas las medidas razonables en la investigación de los delitos de odio para que ésta sea eficaz y desenmascarar el acto delictivo con protección a las víctimas de estos.

La sentencia aborda el caso de los intentos infructuosos para abrir la escuela musulmana sita en la localidad de Kobuleti, ante los bloqueos reiterados llevados a cabo durante meses en connivencia con la policía y las autoridades locales.

El Tribunal considera probado que los demandantes fueron objeto de abusos verbales y discursos de odio y amenazas dirigidas contra ellos y su fe musulmana, y habían sido humillados, *inter alia*, al verse restringido el ejercicio de sus derechos, como la libertad de circulación, por lo que el Tribunal acepta que se sintieran ofendidos, asustados y traumatizados por los acontecimientos que tuvieron lugar en septiembre de 2014, en relación con la apertura del internado musulmán.

En base a lo expuesto, en lo que respecta a la protección de los demandantes frente a la acción de las turbas, la incitación al odio y otras acciones discriminatorias, se observó una aparente falta de respuesta adecuada por parte de las autoridades a la continua injerencia en la vida privada la dignidad y las creencias religiosas de los demandantes. Asimismo, el Tribunal considera que la actitud pasiva de las autoridades contribuyó a intensificar el trato discriminatorio sufrido por los demandantes al no identificar ni sancionar a los autores ni restablecer el orden jurídico, permitiendo los agentes de policía que los manifestantes participaran de manera repetida y duradera.

Las autoridades internas se vieron confrontadas *prima facie* indicios de incitación al odio, amenazas y trato humillante motivados por creencias religiosas de los solicitantes, lo cual exigía una aplicación efectiva de los mecanismos de derecho penal interno capaces de dilucidar el posible motivo de odio detrás de los hechos violentos y de identificar y, en su caso, sancionar adecuadamente a los responsables.

La Corte considera que una investigación rápida y eficiente era razonable y necesaria dadas las circunstancias para desalentar y reprimir la acción ilegal y discriminatoria de las turbas. Sin embargo, nunca se llevó a cabo una investigación de este tipo, transcurriendo más de ocho años desde el inicio del procedimiento, no habiéndose concluido la investigación y sin haber procesado o acusado persona alguna. Tal paso del tiempo, del que no se ha dado explicación alguna, puede no solamente socavar una investigación, sino también comprometer definitivamente sus posibilidades de conclusión. Además, la deficiente y prolongada investigación penal de las denuncias de discriminación religiosa contribuyó a crear una atmósfera de aquiescencia oficial y crear un sentimiento general de impunidad.

Por todo ello, era esencial que las autoridades nacionales competentes adoptaran todas las medidas razonables, incluso para llevar a cabo la investigación en ese contexto específico, con el fin de desenmascarar el papel de un posible sesgo religioso en los hechos en cuestión y proteger a las víctimas de la discriminación religiosa, concluyendo el Tribunal que en este caso se produjo la violación de las obligaciones positivas del Estado demandado en virtud de los artículos 8 y 9 de la Convención en relación con el artículo 14.